

Acciones sindicales contra la pobreza en América Latina y el Caribe

Cooperativas, cursos de formación, nueva sindicación en el sector informal, actividades para ayudar a los niños que trabajan, recuperación de fábricas que quebraron, alianzas con otros movimientos sociales... Los sindicatos de América Latina y el Caribe combaten la pobreza de muchas maneras, como se ve en un nuevo informe preparado por encargo de la OIT.

Durante los últimos decenios, la pobreza puede haber disminuido en América Latina y el Caribe pero eso no quita que siga afectando a más del 40 por ciento de la población. En un nuevo informe preparado por encargo de la OIT¹ se muestra que los sindicatos de la región están tomando esta cuestión muy seriamente. Se citan asimismo algunos ejemplos de «buenas prácticas» en materia de medidas sindicales contra la pobreza.

El estudio se basa en un «informe virtual», es decir, información tomada de sitios web de los sindicatos de la región y de organizaciones internacionales solidarias, como así también en entrevistas a dirigentes sindicales que participaron en abril de 2005 en el Congreso de la ORIT, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores de la CIOSL.

Como se indica en el mismo informe, quizás la combinación de fuentes informativas haya dado lugar a que se sobredimensione un poco el papel que desempeña la cooperación internacional en los proyectos contra la pobreza que llevan a cabo los sindicatos de la región. No obstante, está claro que tal solidaridad mundial reviste mucha importancia.

Niveles de pobreza

Según las estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo citadas en el informe, en América Latina y el Caribe alrededor de 222 millones de personas vivían en 2004 sumidas en la pobreza. Es decir, el 42,9 por ciento de la población total, lo que repre-

senta un ligero aumento con respecto al 42,5 del año 2000. El estudio señala que no es probable que la región alcance para 2015 los objetivos de reducción de la pobreza.

Esto no implica que se estén menospreciando los logros alcanzados en los decenios pasados. Pero no todos los países de la región redujeron considerablemente la pobreza global. Entre 1990 y 2002 ésta disminuyó un 9 por ciento. En general, la disminución fue más acelerada en las zonas urbanas que en las rurales.

Sin embargo, ese porcentaje no revela algunas de las grandes diferencias existentes entre distintos países, especialmente en América Latina. En la actualidad, Chile y Costa Rica tienen índices de pobreza inferiores al 20 por ciento de la población, mientras que en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay, más del 60 por ciento de la población es pobre. Existen además dos grandes excepciones a esta tendencia descendente de la pobreza. En Venezuela, la pobreza aumentó un 22 por ciento entre 1990 y 2002 y en la otrora próspera Argentina ¡casi el 100 por ciento!

Con respecto a la relación entre pobreza y trabajo, el estudio apoya «la hipótesis más difundida, consistente en que los pequeños productores agrarios y urbanos, los empleados de las microempresas y el personal doméstico corren más riesgo de estar en la pobreza que los empleados públicos, los empleados del sector formal, los profesionales y los técnicos. En los casos más extremos, los índices de pobreza que se observan entre los trabajadores agrícolas son un 170 por ciento superiores a los de los empleados públicos (51 por ciento

contra 19 por ciento)». No obstante, el estudio subraya asimismo que «los asalariados del sector formal no difieren mucho de otros trabajadores en lo concerniente a dependencia». Esto indica que la flexibilización y la desregulación laborales han avanzado en este ámbito, conforme con lo que ACTRAV denomina «informalización de la economía formal».

Sindicación de los trabajadores del sector informal

En esta región, al igual que en otros lugares, los trabajadores del vasto sector informal tienden a ser quienes están en peor situación. Por lo tanto, no cabe duda de que las campañas de sindicación de trabajadores del sector informal pueden contribuir a combatir la pobreza. Como se señala en el estudio, la acción sindical internacional que se lleva a cabo en la región desde los años ochenta pone considerable énfasis en la sindicación de esos trabajadores. A menudo, esto significó trabajar con movimientos que no eran sindicales propiamente dichos, aunque colaboraban con el sindicalismo y, en algunos casos, sirvieron de trampolín para que se formaran centrales sindicales nacionales.

En muchas partes de la región, entre las afiliadas de las federaciones sindicales nacionales ahora hay sindicatos o asociaciones sectoriales informales. En el estudio se dan ejemplos detallados de este tipo tomados de dieciséis países de América Latina y el Caribe. Los trabajadores en cuestión son desde choferes de taxi y comerciantes ambulantes hasta costureras y artesanos.

Las *trabajadoras domésticas* constituyen un caso especial porque a menudo son las más pobres entre los pobres. La mayoría de ellas proceden de zonas rurales. En general, son jóvenes de origen indígena o afroamericano. En la región hay una estructura especial que coordina las actividades de las organizaciones sindicales y no sindicales que representan a esas trabajadoras. Dicha estructura, que fue fundada en 1988, se denomina Confederación Latinoameri-

cana y de El Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlatraho). Desde un comienzo se evitaron los términos como «sirvientas» por considerarse que tenían connotaciones feudales. Y, en efecto, el principal reclamo de esas mujeres es que se le dé el mismo trato que a otras trabajadoras. La legislación actual a menudo no abarca al personal doméstico. En consecuencia, este personal es objeto de discriminación y explotación. Por eso, las principales reivindicaciones de la Conlatraho son:

- Que se incluyan leyes específicas en los códigos laborales, con cláusulas que estipulen contratos de empleo, un salario mínimo, una jornada de ocho horas, 30 días anuales de vacaciones y protección para las trabajadoras embarazadas (incluyendo licencia de maternidad).
- Que se acabe con la discriminación por razones de raza o edad.
- Quejas ante la OIT – por denegación de la libertad sindical – contra países que se niegan a otorgar una debida personería jurídica a las asociaciones de esas trabajadoras cuando dichas asociaciones deciden convertirse en sindicatos.
- Denuncia de los casos de acoso sexual.
- Solidaridad con las trabajadoras rurales.

Resumiendo, la Conlatraho desea que se brinde a esas trabajadoras total reconocimiento a fin de que los empleadores ya no sean amos y señores de sus vidas e identidades. Al mismo tiempo, hace hincapié en que las confederaciones sindicales nacionales no deberían dejar «para lo último» a las trabajadoras domésticas en lo referente a la negociación salarial.

Acción sindical más amplia

Si bien no están específicamente destinadas a luchar contra la pobreza, diversas actividades sindicales que se llevan a cabo en la región benefician principalmente a los grupos más pobres de la sociedad. Entre tales actividades son típicos los proyectos

de solidaridad económica, las actividades apuntadas a los desempleados y las campañas por un salario mínimo. En el informe se mencionan tres ejemplos:

La Confederación Unica de Trabajadores (CUT) del Brasil fundó en 1999 la Agencia de Desarrollo Solidario (ADS), en colaboración con los ministerios brasileños de trabajo y rural. Contó con el respaldo de la federación sindical alemana DGB y la fundación alemana Rosa Luxemburg. El proyecto aspira a promover el establecimiento de empresas autónomas y fomentar así la generación de empleos y de ingresos. Esto se llevará a cabo organizando económica, social y políticamente a los trabajadores e incluyéndolos en un proceso de desarrollo sostenible basado en la solidaridad. El proyecto comprende tres aspectos: creación de cooperativas agrupadas, brindando servicios solidarios de crédito junto con formación y evaluación de las empresas, y promoviendo investigación, comercialización y desarrollo tecnológico. Es, por lo tanto, un ejemplo de «economía solidaria» la línea que siguen muchos de los proyectos actuales en la región. Como se señala en el informe, este enfoque se fundamenta en «formas democráticas y solidarias de organizar la producción, donde los trabajadores toman las decisiones de manera colectiva conforme a sus propias características. La economía solidaria también tiene capacidad para crear oportunidades de empleo y de ingresos a través de la autogestión». Para conseguir sostenibilidad, autonomía y capacidad innovadora, esas empresas deben cooperar entre sí, razón por la cual «los complejos cooperativos se han establecido como concentraciones locales de empresas económicas solidarias con una afinidad sectorial». La Agencia de Desarrollo Solidario aspira a promover esos complejos sectoriales. Respaldó asimismo la creación en 2002 de un sistema nacional de crédito solidario (Economía Popular Solidaria – Ecosol), que otorga líneas de crédito a empresas solidarias autónomas que contribuyen al desarrollo local. El sistema está compuesto por asociaciones de crédito que operan siguiendo idénticos principios de autogestión, viabili-

dad económica y financiera y solidaridad. Dado que hay sindicatos de crédito urbanos y rurales, el sistema procura la integración de ambos grupos de trabajadores. Ecosol tiene actualmente 26 sindicatos de crédito en diez de los estados brasileños, con fondos que ascienden en total a más de un millón de dólares. La Agencia también trabaja para que las políticas gubernamentales locales y nacionales sean más favorables a la solidaridad económica. Y ha creado un programa solidario de inversiones, junto con la federación sindical CSN del Canadá y diversas organizaciones no sindicales de Quebec y el Brasil.

También en el Brasil, el Centro de Solidaridad con los Trabajadores combate el desempleo principalmente de cuatro maneras: derecho a subsidio de desempleo, colocación laboral, cursos de formación profesional y asistencia a pequeñas empresas que no tienen acceso a otros programas. Dicho centro, a cargo de la federación Força Sindical desde 2001, tiene su sede en el local de dicha organización y sucursales en distintas localidades del país. Un banco de datos establece la coincidencia de los trabajadores registrados en el centro con los empleos disponibles, mientras que un programa de generación de empleo e ingresos ayuda a los trabajadores que desean iniciar sus propios negocios. Força Sindical les brinda formación. Para 2004 el centro ya había colocado a 150.000 personas, conseguido subsidios de desempleo para 180.000 y brindado cursos de formación a 375.000.

Un *salario mínimo* para todos los argentinos es la ambiciosa meta de una propuesta elaborada por la central sindical CTA. Tras conseguir apoyo para esa medida, la CTA la ha hecho llegar al nivel de proyecto parlamentario. La proposición, denominada Seguro de Empleo y Formación (SEF), garantizaría que ningún hogar quedara por debajo de la línea de pobreza (actualmente 500 pesos argentinos para una familia tipo) y que todos los ciudadanos tuvieran acceso a las mejores prestaciones posibles en lo referente a atención médica, educación y subsidios por edad avanzada, invalidez y fallecimiento. De esta manera, la

cobertura social sería independiente de la situación legal de la persona en el mercado laboral. Con este programa se darían 380 pesos a todos los jefes de familia sin empleo y 60 pesos por menor (hasta los 18 años de edad) a todos los hogares. Para las familias tipo, esto implicaría un total de 500 pesos, con lo que pasarían a estar por encima de la línea de pobreza. Las sumas se indexarían en función de la línea de pobreza. La CTA sostiene que con la entrega de ese dinero también aumentaría el poder de negociación de los trabajadores con empleo, lo que constituye una de las razones por las que prefiere este enfoque en lugar de procurar conseguir un salario mínimo legal. El programa se financiaría eliminando algunas exenciones impositivas sobre los ingresos de capital pero también con la mayor recaudación de impuestos al valor agregado generada por la nueva demanda (se estima que los efectos directos e indirectos de la nueva distribución de los ingresos harían que aumentara el gasto de los consumidores en un 7 por ciento). Sumado a la eliminación de otros programas de gastos sociales, a la reinstauración de aportes de los empleadores en algunos sectores y a mayores impuestos sobre los artículos de lujo, este paquete daría un total de 20.170 millones de pesos. La CTA dice que de materializarse esta iniciativa tan sólo el 61 por ciento de esa suma sería suficiente para financiar el Seguro de Empleo y Formación y para elevar el nivel de todos los hogares argentinos haciéndolos que pasen a estar por encima de la línea de pobreza.

En efecto, el Uruguay está casualmente comenzando a instituir algo similar, si bien en una escala más limitada. Tras el cambio de gobierno de marzo de 2005, lanzó un Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (PANES). Su finalidad es cubrir las necesidades básicas de las 180.000 personas más pobres del país. Con un costo anual de 100 millones de pesos uruguayos, el programa les proporcionará atención médica básica, educación y formación, a cambio de trabajos realizados para la comunidad. Esto es parte de una campaña en pro de un Ingreso Básico Universal.

La federación sindical PIT-CNT respalda el plan y está preparando la participación activa de los sindicatos en la organización de la salud pública, educación, bienestar infantil y fondos de seguridad social.

Ayuda directa

En el estudio se observaron asimismo muchos ejemplos de acción sindical apuntada directamente a combatir la pobreza:

A través de un proyecto que lleva a cabo la confederación sindical CUSG en Guatemala se brinda *formación bilingüe a artesanos indígenas*.

La federación nicaragüense CTD participa en la *distribución de alimentos* que se lleva a cabo a escala municipal entre las familias de pescadores.

La Confederación Unitaria Sindical-Autónoma (CUS-A) brinda *formación para las mujeres de los mercados* en las zonas francas de exportación de Nicaragua. Los cursos se refieren sobre todo a sus relaciones con los proveedores y a cómo mejorar sus malas condiciones de trabajo.

La federación CUTH de Honduras participa en un *programa gubernamental de ayuda para una zona rural empobrecida*. El programa cuenta con el respaldo del Gobierno italiano y de las tres confederaciones sindicales de Italia. Diversos organismos italianos de ayuda también han trabajado con la CUTH en la lucha contra la pobreza, principalmente luego del paso del huracán Mitch (1999-2000), cuando ayudaron a reforzar la asociación de pequeños productores y relanzar actividades económicas familiares.

En Nicaragua, la central sindical ATC proporciona *ayuda alimentaria a niños rurales*, en cooperación con el Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo (ISCOS), de la central italiana CISL.

Un proyecto de la central sindical CTRP de Panamá ayudará a los trabajadores de las plantaciones bananeras – seriamente afectados por los recientes cierres – a iniciar *plantaciones de banana autogestionadas*.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de México

ha lanzado *programas de autoayuda para familias encabezadas por desempleados* con la finalidad de romper el ciclo de drogadicción y de violencia doméstica. El proyecto ayuda también a esas personas a encontrar trabajo.

También la Confederación de Trabajadores de México (CTM) está brindando apoyo financiero y formación a *mujeres jefas de familia que están creando una cooperativa de producción de alimentos*.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia está a cargo de un *centro para trabajadoras del sector informal*, con respaldo de muchas organizaciones de distintos puntos del mundo, inclusive de la OIT. Entre las actividades hay cooperativas, cursos breves de formación, asistencia para las tareas contables, un fondo rotativo de crédito y una asociación mutua. Las cooperativas han desarrollado actividades en los ámbitos de reciclado de material de desecho, venta ambulante, trabajo doméstico y cuidado infantil.

El reciclado de material también es el centro de atención de un proyecto que lleva a cabo Sintrainagro (CUT), el sindicato de trabajadores agrícolas de Colombia. Ha establecido una *planta de reciclado de los excedentes de envoltorios de plástico de las plantaciones bananeras*. El plan emplea a *viudas de guerra* que son jefas de familia con un promedio de cuatro hijos. El proyecto también ha construido escuelas y promovido actividades sociales y culturales.

Los sindicatos de lavanderas de Colombia, afiliados a la confederación de trabajadores CTC, han recibido los beneficios de un proyecto respaldado por la ORIT y la central canadiense CLC. Entre las actividades que se realizaron se instalaron lavaderos, se creó una cooperativa de consumo y se construyeron viviendas.

En Quito, la capital del Ecuador, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) administra un *centro médico para los trabajadores del sector informal*. Dicho centro, que cuenta con el respaldo del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), de la Unión General de Trabajadores (UGT) de España, ha hecho extensivos sus servicios a la po-

blación local en general y ahora proporciona también atención básica de salud y medicamentos de bajo costo.

En un proyecto a cargo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se promueve la *solidaridad económica entre las artesanas*. Las mujeres eran acosadas por la policía, por lo que el proyecto solicitó a la municipalidad que otorgara un permiso a esas artesanas, a fin de que pudieran trabajar en grupo y formalizar su negocio. Se les impartió asimismo formación en gestión financiera, incluyendo facturación para los mercados de exportación. El proyecto trabajó para mejorar la autoestima de esas mujeres, que más tarde formaron una federación regional de artesanas. Lo aprendido con este proyecto se está aplicando ahora en otra región.

Entre tanto, para las *trabajadoras rurales* pobres del Perú, la Confederación Nacional Agraria (CNA) ha lanzado un proyecto que agrupa las asociaciones agrícolas locales y regionales de todo el país. Desde 2003 el proyecto viene proporcionando a las mujeres formación en materia de técnicas agrícolas, organización y cuestiones sociales. Sus actividades de producción contaron con el respaldo de un fondo de microcréditos y se formaron alianzas de producción.

En otro proyecto que lleva a cabo en el Perú la federación sindical FETTRAMAP, de la CUT, la atención se concentra en la *seguridad social y las condiciones de trabajo de los estibadores terrestres y carretilleros*. Los 8.000 miembros del sindicato eran considerados autónomos. Con el respaldo de la OIT consiguieron que un comité técnico multisectorial, presidido por sindicalistas, examinara los pesos que actualmente cargan los estibadores. La finalidad es reducir el peso de los 130-140 kilos actuales a 50 kilos. El acarreo de pesos excesivos (a menudo, con el consentimiento de los mismos carretilleros, que procuran mejorar sus magros ingresos) ocasiona muchas veces discapacidad permanente. La FETTRAMAP también está ejerciendo presión para que se aplique una ley que data de quince años atrás y que daría a los estibadores derecho a cobertura social, índices

salariales basados en la duración del trabajo y licencia anual. Por el momento, la FETTRAMAP ha creado su propio sistema de seguridad social. El gran desafío que enfrenta actualmente el sindicato es amortiguar la repercusión de la mecanización en un gran mercado mayorista, aunque parece inevitable que se pierdan algunos puestos de trabajo entre los carretilleros. Entre tanto, el sindicato ha ampliado su cobertura a los choferes de triciclo. El respaldo para el proyecto procedió de la federación de sindicatos FNV neerlandesa y del ISCOD de la UGT de España.

Los *servicios para los trabajadores del sector informal* constituyen el centro de atención de diversos proyectos que inició la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) del Perú con respaldo del ISCOD español. Un programa piloto es el denominado Casa del Trabajador Informal (CATIC). Desde 1998 este programa ha venido suministrando formación, atención de salud, asesoramiento legal y económico, programas alimentarios y formación en técnicas de comunicación.

En la Argentina, la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de la CTA ha creado una serie de *cooperativas para los trabajadores sin empleo* que pertenecen al sindicato. Actualmente existen casi cien cooperativas de ese tipo, cuya finalidad es facilitar la participación sindical en proyectos estatales de viviendas sociales. Fundada en 1992, la FTV-CTA se originó en movimientos que ocupaban tierras urbanas de propiedad estatal para construir en ellas. Hacia finales de los años noventa, este movimiento se amplió y pasó a formar el movimiento piquetero, que lanzó campañas militantes urbanas sobre cuestiones que van desde reclamos laborales hasta políticas de transferencia de ingresos públicos. Desde 2002 los «piqueteros» se han convertido en un canal que distribuye ingresos dentro del marco del Programa Jefes y Jefas de Hogar del nuevo gobierno.

Para *crear puestos de trabajo como forma de combatir la pobreza*, el sindicato de metalúrgicos de la CUT brasileña ha creado un programa dentro del cual un porcentaje de los salarios se destina a formación, servi-

cios de colocación y cooperativas autogestionadas para las personas sin empleo.

Una asociación de *cartoneros y recicladores de material* está afiliada a la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) brasileña. Ha creado una cooperativa de reciclado de material y una estructura de coordinación, con programas similares en otros puntos del país.

Una asociación de residentes de la comunidad paraguaya pobre de Villa Madrid se afilió recientemente a la CUT, a cuyo último Congreso asistieron representantes de comités de barrio. El sindicato promueve ahora la construcción de *viviendas sociales* para ellos, a través de un acuerdo firmado con la Comisión Nacional de la Vivienda.

En el Uruguay, el sindicato ABEU de empleados bancarios y la confederación PIT-CNT han hecho frente a una serie de *emergencias sociales*. Tras una gran inundación en 2001, encabezaron una colecta de fondos para las víctimas. Al mismo tiempo, lanzaron una campaña de información sobre los riesgos de vivir en las riberas de los ríos. Y cuando la crisis financiera golpeó la industria de la construcción, los sindicatos ayudaron a los trabajadores de ese sector que quedaron sin empleo a establecer microempresas agrícolas, para lo cual el sindicato de trabajadores bancarios pagaba un pequeño salario. Dada la crisis económica, la PIT-CNT también emprendió una política más amplia para recuperar fábricas y terrenos que se liquidaban por quiebra.

Trabajo infantil

En toda la región, las acciones para erradicar el trabajo infantil constituyen una parte importante de las campañas sindicales directas contra la pobreza. El estudio dice que «durante los años noventa, el programa IPEC de la OIT dio un gran impulso a este enfoque, programa donde se reconoce a las organizaciones sindicales como un tipo de agencia para la aplicación de programas de acción directa o como beneficiarios de programas de acción

que promueven los objetivos de la OIT englobados en el Convenio núm. 138 y en el más reciente Convenio núm. 182».

El IPEC «ha firmado acuerdos de asistencia técnica y financiera con estructuras sindicales nacionales de la mayoría de los países de la región, para desarrollar programas de intervención directa en materia de trabajo infantil y para promover la participación sindical en comités nacionales abocados a la prevención y la eliminación del trabajo infantil y a la protección de los trabajadores adolescentes de ambos sexos. Con respecto a esto, el IPEC estima que en diversos casos nacionales, la labor sindical promovió directamente la ratificación del nuevo Convenio núm. 182 y del Convenio núm. 138».

Las organizaciones sindicales regionales ORIT y CLAT han participado mucho en los programas del IPEC. En éstos se promovió la promulgación o aplicación de leyes nacionales sobre trabajo infantil y la ratificación de los correspondientes convenios de la OIT. Los programas del IPEC también brindaron a los dirigentes y militantes sindicales el bagaje necesario para elaborar proyectos y propuestas sobre trabajo infantil, como así también para colocar esta cuestión en la línea principal de acción de los sindicatos.

En Costa Rica, por ejemplo, la confederación CMTIC abrió un *centro de cuidado infantil* para los hijos de trabajadores y trabajadoras del sector informal. Al mantener a esos chicos alejados de la calle, el centro contribuye a prevenir la propagación del trabajo infantil. Con formación del IPEC como parte de este proyecto, los sindicatos han creado redes de trabajadores que tomarán nota e informarán sobre casos de trabajo infantil en los lugares de trabajo.

En toda la región, muchos sindicatos ayudan a promover la escolarización de los chicos pobres que trabajan, ya sea proporcionando docentes o ayudando a esos chicos a comprar los útiles escolares.

Buenas prácticas

¿Cuál es entonces la mejor manera de que los sindicatos de la región combatan el continuo flagelo de la pobreza? El estudio seleccionó nueve ejemplos de «buenas prácticas» para describirlos de manera más detallada.

Mejor salud para los trabajadores y trabajadoras rurales fueron los resultados de un programa que promovieron en la República Dominicana la confederación sindical nacional CNTD y la federación de trabajadores agrícolas FALY, una vez más con el respaldo del ISCOD. En el área elegida para el proyecto había una serie de graves problemas de salud, uno de los cuales era la malaria. Las malas condiciones sanitarias y la gran utilización de plaguicidas, como así también el hecho de que el nivel freático estuviera a poca profundidad, habían originado una grave contaminación del agua. Entre 1995 y 2000, el proyecto comenzó por reforzar la organización y administración de la FALY. Luego instaló sistemas de agua potable de bajo costo, sistemas que la gente del lugar puede mantener sola, y finalmente mejoró la producción y los conocimientos técnicos de los pequeños agricultores. La evaluación del ISCOD consideró que el elemento de organización del proyecto, combinado con una fuerte dirigencia local, fue un importante factor educativo. Al mismo tiempo, disminuyó la cantidad de casos de enfermedades originadas por la contaminación del agua y las comunidades locales pasaron en general a tener una mayor participación en la resolución de sus propios problemas. Según el informe «todo esto se podría considerar una lección útil para otras comunidades de la región y un proceso que permite crear conciencia entre la población y las instituciones locales con respecto a la gestión de los recursos naturales».

Ir más allá de las fronteras tradicionales del sindicalismo era el objetivo de la federación UNAC de trabajadores de la alimentación y la agricultura de Colombia. Esta federación, arraigada principalmente en las industrias de alimentación, hotelería y turismo, decidió moverse también entre los

trabajadores rurales autónomos, los pobres rurales, las comunidades urbanas carecientes, las mujeres jefas de familia y las personas desplazadas por la propagación de la violencia o por la ilícita fumigación aérea de los cultivos. Esto significaba trabajar con las estructuras sindicales rurales existentes, como Sintrainagro, con sus 20.000 miembros en el sector de las plantaciones bananeras y las industrias de flores y de aceite de palma, pero también con otros grupos no sindicales de defensa, cooperativas y organizaciones de pequeños agricultores. En lo concerniente especialmente a sus relaciones con las comunidades indígenas, UNAC procuraba forjar nuevas alianzas más que conseguir nuevos miembros. Los intereses comunes subyacentes son el desarrollo de proyectos estratégicos en zonas desgarradas por conflictos y la defensa de los derechos humanos, la biodiversidad y/o los recursos naturales. El proyecto, que se inició en 2001, se concentra en la autosuficiencia alimentaria a través de una agricultura ecológicamente sostenible. También ha respaldado una producción favorable al medio ambiente para exportación, ya sea nuevos cultivos como el hongo (seta) asiático *shiitake* o la fruta local uchava (*physalis*). Se crearon varias cooperativas, principalmente para los pescadores y para los cultivadores de banana que solían trabajar en Dole. Otro de los principales focos de atención del proyecto son los esfuerzos para proteger a los niños y a los jóvenes de la guerra, la drogadicción y la explotación en el trabajo y el proyecto ha creado también programas de atención médica para los pobres rurales.

Un fondo de préstamos rotativos para mujeres rurales, en una región del Perú, es el fruto de la cooperación entre el ISCOD y la Asociación de Mujeres Trabajadoras Campesinas de la provincia de Huancabamba (AMHBA). Fundada en 1993 en una época de violencia política en la región, la asociación AMHBA se afilió a la central sindical nacional CUT en 1996. Actualmente tiene unas 7.000 mujeres afiliadas y la mayoría de ellas son jefas y proveedoras de sus hogares. Los préstamos rotativos financian grupos de microproducción compuestos

cada uno de ellos por unas 150 mujeres. Sus ingresos proceden de la cría de conejos, cobayos y truchas pero el proyecto tiene también importantes elementos sociales (provisión de servicios, formación, campañas contra la violencia doméstica, promoción de la salud reproductiva). Se están elaborando otros programas de generación autónoma de ingresos y se están haciendo acuerdos con el Gobierno central y con gobiernos locales para suministrar servicios básicos. La AMHBA también ha hecho una mollienda en pequeña escala. Planea desarrollar una producción agrícola y un programa de comercialización; éstos proporcionarían empleos para mujeres en las plantas procesadoras y trabajo para hombres en el campo y permitirían también disponer de alimentos frescos y nutritivos para sus hijos. Entre los demás logros de la AMHBA se cuenta el centro de educación permanente para mujeres y un refugio para mujeres golpeadas. Su comité de defensa del medio ambiente se ha hecho cargo de una empresa minera cuyas actividades se consideran una amenaza para el ecosistema local, único en su tipo. El informe señala que la AMHBA ha conseguido crear «una agrupación de centenares de mujeres dirigentes y militantes de campañas cuya autoestima ha mejorado al conocer sus derechos y deberes de ciudadanas y defender su salud reproductiva, sexual y psicológica».

Un centro para los chicos trabajadores, situado en otra zona del Perú, brinda educación y comida a los jóvenes que trabajan pero ganan poco dinero como maleteros, vendedores de agua, lavadores de autos o lustrabotas. Inicialmente, el Centro Cristo Rey del Niño Trabajador (CCRNT) se concentró en ayudar directamente a 30 niños e indirectamente a otros 1.000, enviando personal encargado de formación a un programa del gobierno, el SENATI. Sin embargo, para 2004 se habían registrado en el centro 470 niños y adolescentes. Unos 20 niños viven en el centro y otros 250 toman allí duchas calientes regularmente. La gestión del CCRNT está a cargo de la federación de metalúrgicos del Perú FETIMAP, en colaboración con la or-

ganización regional de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas y SASK, el sindicato de metalúrgicos de Finlandia. El programa ha formado a jóvenes en mecánica automotriz y soldadura. Al mismo tiempo, en cursos y grupos de debate se tratan temas como salud y seguridad profesionales, legislación laboral y leyes constitucionales, y el sindicalismo y su contribución al desarrollo social. Se han establecido contactos con empleadores que financian el SENATI y que han manifestado interés en que sus trabajadores reciban formación sindical.

La Federación de Trabajadores de la Industria Argentina (FETIA), junto con la central sindical nacional CTA, proporciona *asistencia técnica para autogestión obrera*. Su red se basa en el movimiento de recuperación de empresas, que se inició a raíz de la profunda crisis económica del país. Desde 2001 en adelante, las empresas recuperadas pasaron a ser comunes a medida que los trabajadores comenzaron a tomar empresas que habían cerrado. La red aspira a acompañar y consolidar experiencias de autogestión y a reforzar las estructuras para elaborar políticas en las cinco regiones de la Argentina. Hay tres niveles de organización: las empresas autogestionadas mismas, la Asociación de Trabajadores Autónomos y la Red de Asistencia Técnica. La Asociación de Trabajadores Autónomos es el sindicato de los trabajadores en cuestión. Su tarea consistirá en plantear reclamos sociales y coordinar estrategias laborales sectoriales con los sindicatos de los empleados. Dentro de las empresas autogestionadas y las cooperativas, su papel consistirá en apuntalar la democracia interna, mejorar las condiciones de trabajo, resolver conflictos internos y mantener una «ética laboral». La Red de Asistencia Técnica está compuesta por unidades profesionales que brindan respaldo para autogestión, desarrollo y mejora de las calificaciones empresariales y para construcción, traslado e intercambio de equipos y conocimientos. Según el informe, la CTA considera que las empresas recuperadas forman parte de la economía social, dado que son una manera de cubrir

las necesidades básicas sin estar dentro de la estructura tradicional del mercado laboral. No obstante, no hay ningún marco legal específico destinado a promover la sostenibilidad de esos experimentos. La CTA cree asimismo que la autogestión es «preferible a otros enfoques de la economía social, como las microempresas, que tienden a tener carácter benéfico y generalmente son de mala calidad».

La *asistencia para la autoayuda de los trabajadores desempleados u ocasionales* es la finalidad de otro proyecto que llevan a cabo en la Argentina las Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) y el Consejo Coordinador Argentino Sindical (CCAS). El proyecto opera en Buenos Aires y áreas suburbanas. La OLP, que data de la crisis económica de 1991, reunió diversas organizaciones sociales con experiencia previa en trabajo solidario, buscando establecer una coordinación de esfuerzos. Su nombre refleja las tradiciones peronistas de poder popular. La mitad de sus miembros son beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, que les entrega a cada uno de ellos 50 dólares mensuales a cambio de tareas efectuadas para el municipio. La OLP tiene dos actividades principales: programas alimentarios y promoción de la autogestión. Alrededor de cincuenta comedores situados en los barrios pobres proporcionan un promedio de 4.500 comidas gratis por semana a niños (y a veces adultos). La mayor actividad productiva autogestionada se desarrolla en el área de los textiles. Las mujeres que solían coser en sus casas utilizando sus propias máquinas están agrupadas ahora en pequeños talleres de quince a veinte trabajadoras cada uno. En total, participan sesenta mujeres. Otros de los oficios son: carpintería, marroquinería, cocina y cultivo de champiñones. En este programa también se hacen huertas familiares cuya producción se destina al consumo de los mismos participantes y a los comedores. Los suministros de las cantinas también proceden de donaciones de comerciantes locales y de intercambios con otros productores. Hay planes para convertir las huertas en grandes unidades con producción diversificada. Para

todas esas actividades, la producción y las ventas se hacen en el nivel local. Se está procurando conseguir permisos para efectuar ventas de la producción al público, ya sea en negocios o viviendas particulares. Se podrían también utilizar los puntos de venta ya existentes de otras organizaciones sociales. Y los artículos de cuero ya se están vendiendo en centros comerciales. La OLP está preparándose a lanzar una marca para sus productos, «Flor de Ceibo», la flor nacional de la Argentina. En las etiquetas se aclarará que la mercadería es «producción nacional de la economía solidaria». Según el informe, este enfoque «tiene la virtud de reemplazar la política social, a cargo de asistentes sociales, por una política económica». En realidad, la OLP se muestra muy crítica con respecto a las actuales disposiciones sociales oficiales. Más de la mitad de sus miembros perciben el Plan Jefes y Jefas de Hogar de las autoridades, que les paga a cada uno 50 dólares mensuales a cambio de tareas desarrolladas en los municipios, como limpieza y mantenimiento. Pero la OLP dice que este programa está plagado de clientelismo y que, en todo caso, origina el despido de empleados municipales. La OLP cree que para desarrollar más la economía social se requiere una clara presencia estatal en distintos ámbitos: formación profesional, créditos para investigación de mercados internos y extranjeros y compra o intercambio de mercaderías y servicios en el nivel provincial y municipal.

Un *registro de trabajadores y empleadores rurales* ayudaría a que los trabajadores rurales de las 21 provincias de la Argentina pasaran a formar parte de la economía formal y estuvieran cubiertos por las disposiciones de la seguridad social. Junto con el trabajo doméstico, en el trabajo rural se encuentra la mayor proporción de trabajo no registrado (más del 60 por ciento). El nuevo registro, que se inició en 2004, es el resultado de años de intenso cabildeo de parte de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), afiliada a la central sindical CGTRA. El registro, que es obligatorio tanto para los trabajadores como para los empleadores,

brinda a los trabajadores rurales un carné de trabajo que muestra sus sucesivos empleadores. Con esto se contribuye a que los trabajadores consigan la protección a la que tienen derecho dentro del marco de la reglamentación laboral agrícola nacional y del sistema de subsidios de desempleo. Hasta ahora, los trabajadores y sus empleadores han hecho aportes al sistema de desempleo sin recibir a cambio ninguna cobertura. El nuevo registro está a cargo de una junta de gestión compuesta por sindicatos y patronal y dos representantes del Ministerio de Trabajo, y está presidido por la UATRE. La finalidad consiste en promover el ingreso de los trabajadores rurales y de los empleadores al sector formal de la economía, estimular la producción y el empleo rurales, definir políticas nacionales y/o regionales de producción, terminar con la competencia injusta entre empleados y empleadores que no están registrados y los que sí lo están, y brindar igualdad de oportunidades a los trabajadores al integrarlos a un sistema de seguridad social adecuadamente financiado. Además de proporcionar a los trabajadores el carné gratuitamente y de verificar su autenticidad, el sistema de registro coordina la acción destinada a facilitar la contratación de trabajadores, recopila estadísticas de trabajo no declarado, proporciona subsidios sociales y administra la distribución de los subsidios de desempleo. Próximamente también creará un servicio de conciliación para el sector rural. Hasta ahora se han registrado 300.000 trabajadores y 70.000 productores. Según la UATRE, este especial sistema de registro es el primero en su tipo en el mundo y España y diversos países latinoamericanos están contemplando la posibilidad de ponerlo en práctica.

Uno de los ejemplos brasileños, efectivamente, está compuesto por dos proyectos en uno. Ambos están a cargo de las afiliadas de la federación sindical Força Sindical, en colaboración con la federación sindical italiana UIL.

El sindicato de empleados de comercio de São Paulo (SECSP) está administrando un *centro de educación para niños y adolescentes en un barrio marginal brasileño*.

Este proyecto también está respaldado por sindicatos y asociaciones de jubilados de Italia y por bancos de este último país. El programa se lleva a cabo en una *favela* (barrio marginal) de los alrededores de São Paulo. Se guía por el principio de que la acción para combatir la pobreza no se debe limitar a los ingresos, sino que debe hacer frente asimismo a necesidades sociales más amplias, como empleo, educación, transporte, salud, vivienda, sistemas sanitarios y alimentación. Por lo tanto, la finalidad es cambiar todo el entorno de los chicos y sus familias. El programa compró su primer local, con suficiente espacio para sus actividades. Inaugurado en 1992, inicialmente trabajó con 25 niños y adolescentes. Desde entonces, la cantidad de participantes subió a 300. Entre las actividades hay clases de refuerzo en portugués y matemática, se imparten nociones básicas de informática, bordado, pintura en tela y papel, como así también lecciones de inglés e italiano y de ejecución de música clásica en distintos instrumentos.

La asociación EREMIM tiene también un *enfoque social de las necesidades de las familias carecientes*. EREMIM opera en el Brasil desde 1999. Está a cargo del sindicato de trabajadores metalúrgicos de Osasco y de su región y ayuda a las familias de la zona pobre de Rochdale, Osasco, donde está situado el club deportivo del sindicato. Distintas fuentes han brindado financiamiento adicional para el programa, como por ejemplo, la central sindical nacional estadounidense AFL-CIO. En primer lugar, el proyecto hizo investigaciones en más de 250 hogares para establecer cuáles eran los principales problemas. Se observó que los niños no rendían en la escuela y que entre los adolescentes había un elevado índice de delincuencia y altos índices de analfabetismo y baja asistencia a clase (43 por ciento de los adultos no terminó nunca la escuela primaria). Elevadas proporciones de jóvenes y adultos estaban fuera del mercado laboral (un promedio de 50 por ciento). Los ingresos familiares eran especialmente bajos. Por eso, el sindicato decidió que era preferible destinar su club deportivo a una finalidad más democrática,

promoviendo el concepto de ciudadanía y la conciencia crítica y contribuyendo al desarrollo humano en la zona, especialmente a la educación. Los objetivos específicos de EREMIM son: desarrollar capacidades básicas como la expresión oral, lectura, escritura, aritmética y resolución de problemas. Desea hacerlo de manera productiva, personalizada y útil para la población que participa, buscando desarrollar las calificaciones específicas necesarias para ingresar y permanecer en el mercado laboral y promover la revitalización social y económica de las familias en cuestión. Un programa educativo de respaldo ayuda a unos doscientos niños y adolescentes a mejorar su rendimiento escolar, al tiempo que en un programa de formación a través del trabajo se imparte a treinta jóvenes capacitación para desempeñarse como trabajadores comunitarios y comunicadores sociales. Se hace esto con una doble finalidad: brindar a los jóvenes las calificaciones y las actitudes que necesitan para tener un empleo permanente al tiempo que proporcionan servicios a la comunidad. El programa de ayuda social familiar promueve la interacción entre las mismas familias, con el fin de mejorar los niveles de educación a través de un proyecto de educación para adultos y de generación de ingresos a través de una cooperativa de artesanías. La gama de actividades se completa con grupos de teatro, danza y música, como así también con un grupo encargado de las comunicaciones apuntado a la radio, los diarios e Internet. El proyecto promueve la autoayuda entre 600 personas de 130 familias, la mayoría de las cuales tienen mujeres como jefas de hogar.

Mirando hacia el futuro, la *legalización de la tenencia indígena de tierras* es el centro de un proyecto que inició hace poco la Confederación de Trabajadores de Guatemala (CTG) en colaboración con el ISCOD. Quinientas familias indígenas rurales se beneficiarán con este programa, que aspira a consolidar el proceso de legalización iniciado por los acuerdos de paz del país y respaldados por el gobierno. Además de elevar los niveles de vida, el proyecto procura promover una agricultura

sostenible. El sindicato trabajará con el Fondo de Tierras. Un equipo de 24 «promotores legales» – que recibieron formación al respecto –, encabezado por un abogado especializado en bienes raíces, ayudará a las personas a registrar los títulos de propiedad. Se investigará la legalidad de la tenencia de tierra de los participantes, al tiempo que agrimensores y topógrafos determinarán los límites de las mismas. Al mismo tiempo, los agricultores indígenas recibirán asesoramiento sobre la posibilidad de cambiar sus cultivos y de efectuar una utilización más rentable de su tierra, respetando el medio ambiente. Se impar-

tirá asimismo formación sobre nociones básicas de administración y gestión de recursos. Un fondo de garantía, respaldado por un banco, proporcionará los préstamos iniciales. El proyecto incluye también la construcción de escuelas y la provisión de agua potable.

Nota

¹ Hilda Sánchez, «Panorama de la Acción Sindical contra la Pobreza y la Exclusión Social: Mejores Prácticas. La situación en América Latina y Caribe», informe de consultoría, mayo de 2005.
